

RA-57

ASIS

ASOCIACION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOCIALES
Guatemala

**ACUERDOS DE PAZ:
Aspectos Socioeconómicos y
Situación Agraria (6/5/96)**

4

1996

Asociación de Investigación y Estudios Sociales.

Acuerdos de paz: aspectos socioeconómicos y
situación agraria. Guatemala, ASIES, 1996.

59 p. (Revista ASIES, 4/96)

<PROCESO DE PAZ><DEMOCRATIZACION><URNG>
<ASPECTOS SOCIOECONOMICOS> <POLITICA
AGRARIA> <GUATEMALA



EDITOR

Asociación de Investigación
y Estudios Sociales (ASIES)

Apdo. Postal 1,005 A

Ciudad de Guatemala

Guatemala, C.A

DIRECCION

Irma Raquel Zelaya

Arnoldo Kuestermann

Carlos Escobar Armas



ASOCIACION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOCIALES
Guatemala



**ACUERDOS DE PAZ:
Aspectos Socioeconómicos y
Situación Agraria (6/5/96)**

INDICE

Introducción	1
Discurso pronunciado por el Lic. Gustavo Porras Castejón, Coordinador de la Comisión de Paz del Gobierno de Guatemala -COPAZ-, en el acto de firma del Acuerdo "Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria"	3
Discurso pronunciado por el Comandante Pablo Monsanto en nombre de la Comandancia General de la URNG, en el acto de firma del Acuerdo "Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria"	7
Discurso del Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas, Marrack Goulding, en el acto de firma del Acuerdo "Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria"	11
"Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria "	15
I. DEMOCRATIZACION Y DESARROLLO PARTICIPATIVO	16
a. Participación y concertación social	16
b. Participación de la mujer en el desarrollo económico y social	20
II. DESARROLLO SOCIAL	22
a. Educación y capacitación	24
b. Salud	28
c. Seguridad social	30
d. Vivienda	31
e. Trabajo	33

III. SITUACION AGRARIA Y DESARROLLO RURAL	35
a. Participación	36
b. Acceso a tierra y recursos productivos	37
c. Estructura de apoyo	40
d. Organización productiva de la población rural	41
e. Marco legal y seguridad jurídica	42
g. Registro de la Propiedad Inmueble	44
h. Protección laboral	44
i. Protección ambiental	4i
j. Recursos	46
IV. MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y POLITICA FISCAL	46
a. Modernización de la administración pública	46
b. Política fiscal	48
V. DISPOSICIONES FINALES	51
Declaración sobre el avance de las negociaciones del proceso de paz en Guatemala de los Presidentes de Alemania y de Centroamérica	53

INTRODUCCION

La suscripción el 6 de mayo de 1996 del Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, se constituye en un paso trascendental dentro del proceso de paz iniciado hace cinco años en Guatemala.

En dicho Acuerdo confluyen una serie de temas que se vinculan con el desarrollo integral del país y que tienen incidencia significativa en la democratización y la calidad de vida de los guatemaltecos.

El contenido del Acuerdo es producto de una amplia discusión a nivel interno, en la cual los diversos sectores, en su momento, expusieron su visión sobre los temas allí tratados. Aunque el Acuerdo no haya recogido todas las inquietudes, el beneplácito que le ha sido otorgado por diversas organizaciones del país hace que el mismo se convierta de alguna manera, en una propuesta de consenso sobre el rumbo que debe seguir el Gobierno en temas tan delicados como la tierra, la política fiscal y las políticas sociales.

Es por ello que ASIES presenta en este número de su Revista, el contenido del Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. Por la importancia no sólo del Acuerdo, sino del contexto en el cual se ha desarrollado la suscripción del mismo, también se incluyen los discursos pronunciados el día de la firma del Acuerdo por el Subsecretario General para Asuntos Políticos de la Organización de Naciones Unidas, Marrack Goulding, por el Coordinador de la Comisión de Paz del Gobierno (COPAZ), Gustavo Porras Castejón y el Comandante Pablo Monsanto, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

La suscripción del Acuerdo ha sido recibida con complacencia no sólo por los guatemaltecos, sino también por la comunidad internacional. Muestra de ello es la Declaración sobre el Avance de las Negociaciones del Proceso de Paz en Guatemala, suscrita por los mandatarios de la región centroamericana,

reunidos en Montelimar (Nicaragua), la cual se incluye en esta publicación.

Finalmente, cabe señalar que la discusión de los temas contenidos en el Acuerdo no se agota con la suscripción del mismo. No obstante, al haber quedado plasmado en ese documento el tratamiento de ciertos temas en forma ordenada y siguiendo principios y normas constitucionales, se da la pauta para retomar el rumbo del desarrollo sostenible del país en el marco de un nuevo contexto: la paz.

**DISCURSO PRONUNCIADO POR EL LIC. GUSTAVO PORRAS
CASTEJON, COORDINADOR DE LA COMISION DE PAZ
DEL GOBIERNO DE GUATEMALA -COPAZ-, EN EL ACTO DE
FIRMA DEL ACUERDO "ASPECTOS SOCIOECONOMICOS Y
SITUACION AGRARIA"**

Distinguidos asistentes:

El acto que hoy nos reúne renueva la esperanza de los guatemaltecos y alimenta la llama del optimismo. Forma parte de un proceso por medio del cual nuestra Patria cura profundas heridas y perfila su verdadero rostro de país generoso, asiento de cultura milenaria. Si trabajamos arduamente como hermanos, podremos reconstruir la tierra de Cayalá y Paxil, "la de las mazorcas blancas y amarillas, lugar donde abunda el cacao, los zapotes, las anonas, los jocotes, los nances, la miel, los mejores alimentos".

En esa tierra de bosques nuestros ancestros decidieron asentarse luego de su milenaria peregrinación por el continente. Allí inventaron el maíz, escudriñaron los astros para construir el calendario más exacto que se conoce, concibieron la magnitud matemática cero y edificaron, esculpieron y pintaron majestuosos edificios que hasta el presente son testimonio de su grandeza y la de sus descendientes.

El acuerdo que hoy vamos a suscribir es un paso trascendental hacia la paz justa, firme y duradera que anhelamos. El Popol Vuh nos cuenta que los primeros padres "se pasaban suplicando al Corazón del Cielo y de la Tierra: danos buenos y anchos caminos, danos paz quieta y sosegada; danos buenas costumbres y descendencia. ¡Que amanezca! ¡Que llegue la aurora!" Esa es la grata tarea que nos espera, ese debe ser nuestro horizonte.

En la fase del proceso de paz en la cual hemos participado es difícil hablar de una negociación, si por ella se entiende un proceso en el que los interlocutores persiguen sus propios intereses. Lo que en realidad ha ocurrido es un diálogo político en el cual ambas partes nos hemos esforzado por identificar y expresar el interés de Guatemala, y lo hemos hecho sin olvidar que la sabiduría de nuestro pueblo es la que debe señalar

el camino. Por eso el Acuerdo comienza asentando un principio que recorre todas su páginas: el de la participación de los ciudadanos en la definición de sus intereses, en la búsqueda e implementación de soluciones y en el control democrático de los poderes públicos.

Queremos una democracia integral, en la cual las libertades políticas se proyecten hacia lo económico, social y cultural. Sabemos que la ausencia de paz hunde sus raíces en la injusticia, y que ésta ha hecho proliferar la pobreza. Vivimos en un mundo regido por una estricta racionalidad económica, donde al mismo tiempo crece el reclamo por la vigencia plena de los Derechos Humanos, como base indispensable de la convivencia civilizada. Asimismo, los seres humanos comprendemos cada vez mejor que el poder de la mente no nos separa del mundo natural, sino más bien nos permite comprenderlo y respetarlo, para asegurar de esa manera que el milagro de la vida se reproduzca sin cesar.

El acuerdo sobre “Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria” procura combinar el papel del Estado, con la iniciativa personal y social que constituye el motor del desarrollo. Los compromisos que el Gobierno de Guatemala ha reafirmado por medio de dicho Acuerdo no son concesiones, sino intensos esfuerzos por llevar a la práctica las tareas que le señala nuestra Constitución Política. Esta proclama que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia y que su fin supremo es la realización del bien común. Prescribe, además, que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

El Estado debe actuar en el marco de los principios de solidaridad y subsidiariedad, protegiendo al que nada tiene y fortaleciendo los esfuerzos e iniciativas surgidos de la sociedad. Sin embargo, ni las finanzas públicas ni la cooperación internacional pueden ser suficientes para asegurar el desarrollo. Este reclama del incremento de inversiones productivas generadoras de empleos debidamente remunerados, y por ello las partes exhortamos a los empresarios, nacionales y extranjeros, a que inviertan en el país, considerando que la suscripción del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y su puesta en práctica son componentes esenciales de la estabilidad y transparencia que requieren la inversión y la expansión económica.

Hemos dicho, una y otra vez, que el objetivo de la paz es la reconciliación. Debemos superar viejos agravios para construir las condiciones que nos permitan trabajar unidos. Los Acuerdos de Paz ya suscritos han demostrado que los guatemaltecos podemos identificar objetivos comunes si nuestro único norte es el interés de la patria, y si buscamos alcanzarlo con una combinación de realismo y audacia, que es el método que corresponde para colmar rezagos ancestrales y colocarnos en la hora del mundo, en el tiempo de la internacionalización de todas las relaciones, en el momento de los grandes desafíos y también de las oportunidades.

El proceso de paz ha demostrado que el diálogo y la concertación constituyen la vía adecuada e insustituible para resolver conflictos y encontrar soluciones. A lo largo de ese proceso hemos contado con el apoyo solidario de la Organización de Naciones Unidas, de los países amigos de la negociación y de otros países que nos han brindado hospitalidad y recursos: para todos nuestra profunda gratitud.

Hoy queremos agradecer especialmente a nuestros anfitriones, el Gobierno y el pueblo de México, que nos han brindado amistad y cobijo. Nos complace particularmente haber firmado el presente Acuerdo en este generoso corazón de la patria mesoamericana, ligado a nosotros por vínculos milenarios y por actitudes entrañables, como la de haber recibido y apoyado a nuestros hermanos refugiados, siguiendo una larga y hermosa tradición de tierra de asilo. Queremos agradecer también en todo lo que vale el trabajo denodado del moderador de Naciones Unidas, el señor Jean Arnault, cuya dedicación está indudablemente asociada con el cariño a nuestra Patria.

Como coordinador actual de la Comisión Presidencial para la Paz deseo hacer público reconocimiento a la labor desempeñada por mis compañeros: Raquel Zelaya, Otto Pérez Molina y Richar Aitkenhead, así como Amílcar Burgos. Lo que hemos logrado realizar es producto de la acción de conjunto del Gobierno presidido por Alvaro Arzú, y en particular de su intervención personal. Lo que ha allanado el camino de la paz para Guatemala es la política progresista de ese Gobierno y la iniciativa, audacia y espíritu fraternal del primer mandatario de la Nación.

En este momento de alegría, recordamos también a ilustres guatemaltecos que nos antecedieron en este esfuerzo: la paz será obra

de todos. Queremos destacar, asimismo, que la marcha ascendente del proceso de paz ha sido posible por la buena voluntad y el espíritu patriótico de nuestros interlocutores, la Comandancia General de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca: esperamos ansiosos la suscripción del Acuerdo definitivo para que, conviviendo en el marco de la ley, aportemos cada vez más a la grandeza de Guatemala.

Compatriotas: nuestro país vive un momento crucial de su historia, estamos ante una gran oportunidad, no la dejemos pasar, Guatemala lo merece y lo reclama.

Muchas gracias.

México, D.F., 6 de mayo de 1996.

**DISCURSO PRONUNCIADO POR EL COMANDANTE
PABLO MONSANTO
EN NOMBRE DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA URNG,
EN EL ACTO DE FIRMA DEL ACUERDO
“ASPECTOS SOCIOECONOMICOS Y SITUACION AGRARIA”**

Queremos expresar y compartir hoy nuestra gran satisfacción y complacencia. Después de un largo proceso de negociación, complejo y difícil, cuya culminación parecía a veces inalcanzable, estamos firmando un Acuerdo de gran trascendencia en la historia de nuestro país.

Se ha logrado concretar, con una visión de conjunto y de convergencia, un punto de partida para la solución de la problemática socioeconómica y agraria que, por su dimensión y características, originó la guerra.

Esta problemática, al no tener solución, generó y multiplicó condiciones indignas de vida y de pobreza para nuestro pueblo, lo que ha supuesto el mayor atraso para el país.

El proceso de negociación del tema que hoy concluye ha correspondido a las necesidades de la Nación y tiene sus propias características, algunas de ellas inéditas dentro de los procesos de paz, siendo el tratamiento del mismo una de ellas.

En el marco de una sociedad polarizada, ha sido un gran desafío abordar algunos problemas y debatirlos ampliamente. Para encontrar bases de solución a muchos de ellos, hemos tenido que vencer, hasta donde era posible, obstáculos, resistencias, superando incluso el carácter de tabú de ciertos puntos.

El Acuerdo expresa una conjunción de visiones e intereses. No es la solución completa a todos los problemas, pero abre caminos y establece compromisos orientados a resolverlos. Esta es la dimensión histórica de un Acuerdo de principios que permite perfeccionarlo con una proyección de futuro.

Dado que la problemática del país en sus aspectos socioeconómicos y agrarios es de gran magnitud, necesita la participación y aporte de toda la sociedad sin exclusiones. La búsqueda del bien común requiere nuevas actitudes y posiciones amplias por parte de todos los actores sociales.

El esfuerzo de URNG en la negociación de este Acuerdo ha tenido por fin que todos se sientan expresados en él y que las tareas planteadas se asuman patrióticamente con entusiasmo y creatividad.

Un esfuerzo de negociación tan grande no puede quedarse sólo en un documento. Sería indigno pretenderlo y absurdo proponérselo. El cumplimiento de este Acuerdo es vital para garantizar la paz, y la participación de todos en su construcción, nos dará una nueva Guatemala. Hay muchos retos y dificultades que vencer, pero hay también un gran espacio para crecer.

URNG saluda la voluntad política del Gobierno del presidente Arzú, quien ha hecho posible llegar a este Acuerdo. Valoramos positivamente su mensaje y presencia transmitidos a través de la moderna tecnología.

Reconocemos hoy el valioso aporte de la Asamblea de la Sociedad Civil, la que con sus documentos de consenso y preocupación permanente ha aportado elementos sustanciales que están reflejados en el Acuerdo. Es justo reconocer en este día y en este lugar el gran esfuerzo del movimiento popular y sus organizaciones por mantener vigentes las más justas reivindicaciones.

Permítannos recordar hoy a todas las fuerzas integrantes de URNG que durante décadas, y gracias a su entrega y sacrificio, aun a costa de su vida, han aportado para mantener viva la esperanza en la justicia y el futuro. Todo ello no ha sido en vano.

Reiteramos nuestro más sentido agradecimiento, que trasciende lo formal y diplomático, a la fraterna hospitalidad y apoyo del Gobierno y pueblo mexicano, quienes invariablemente nos han brindado las condiciones y escenario propios, para buscar las vías de solución a nuestro conflicto.

El Grupo de Países Amigos ha jugado a cabalidad su papel de apoyo y facilitador. Queremos patentizar nuestro profundo sentimiento a su interés y eficacia.

El rol de Naciones Unidas ha sido insustituible. El apoyo expresado por sus más altas autoridades, el Secretario General y el Subsecretario General Marrack Goulding, aquí presente, ha significado que el proceso de negociación se hiciera posible y tenga dimensión y perspectiva. El moderador Jean Arnault ha aportado sus mayores esfuerzos y capacidades, que hoy queremos reconocer y agradecer profundamente. La Misión de Naciones Unidas, MINUGUA, en su calidad de verificadora ha desempeñado una tarea realmente histórica en relación a los derechos humanos en nuestro país.

Queremos agradecer la presencia aquí de distinguidas personalidades internacionales que han respaldado el proceso de negociación, así como la concurrencia de muchos distinguidos compatriotas, que expresan el más variado conjunto de nuestra sociedad. Su asistencia nos honra y nos compromete con Guatemala y sus mejores causas. Les rogamos lleven nuestro saludo a todos los que representan y comuniquen la experiencia de la que han sido testigos.

Tlatelolco, 6 de mayo de 1996.

**DISCURSO DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DE LAS
NACIONES UNIDAS, MARRACK GOULDING, EN EL ACTO DE
FIRMA DEL ACUERDO
“ASPECTOS SOCIOECONOMICOS Y SITUACION AGRARIA”**

Excelencias:

Hace poco más de un año, el 31 de marzo de 1995, la Comisión de Paz del Gobierno de Guatemala y la Comandancia General de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca firmaron en este salón el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de Pueblos Indígenas. Muy apropiadamente, este evento tuvo lugar en los comienzos de la Década Internacional de Pueblos Indígenas. El Acuerdo fue aclamado como un hito fundamental, y recibió una calurosa acogida por parte de las organizaciones indígenas en Guatemala. Su implementación será un largo y complicado proceso. Pero conocer sus provisiones ya ha contribuido a dar forma al necesario debate sobre cómo acomodar la naturaleza multicultural de la sociedad guatemalteca, y se ha pavimentado el camino para acciones efectivas.

Desde marzo de 1995 han ocurrido muchas cosas en relación al proceso de paz, y también en el proceso político global guatemalteco. Las negociaciones sobre “Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria” caminaron lentamente, y algunas veces con dificultad. Pero al mismo tiempo, el cambio democrático estaba consolidándose en el país, en una manera tal que prometía éxitos en las negociaciones y en la resolución definitiva del conflicto más duradero de América Central. Permítanme recordar algunos de esos desarrollos: el fuerte reclamo, proveniente de amplios sectores de la sociedad Guatemalteca incluyendo -por primera vez en muchos años- el liderazgo de la URNG, en relación a la participación del pueblo en las elecciones; la llegada de nuevas fuerzas políticas al Congreso; la elección del Presidente Alvaro Arzú y su decidido compromiso de eliminar la pobreza, la discriminación y la impunidad; el cese unilateral de las hostilidades por parte de la URNG durante las dos rondas de las elecciones, seguido en marzo por un cese mutuo de acciones militares ofensivas. Y hoy, un nuevo punto puede ser añadido a este

elencos esperanzador: la suspensión del llamado "impuesto de guerra" por parte de la URNG.

A través de este proceso, en la mesa de negociación y dentro de Guatemala ha cobrado fuerza paulatinamente un mensaje: "Las cosas pueden mejorar a través del fortalecimiento de la democracia y del Estado de derecho".

El texto del Acuerdo que acaba de ser firmado es un ejemplo elocuente del poder de este mensaje: se basa en la percepción compartida de que existe la necesidad de un cambio significativo y amplio en la política económica y social. En este documento, el Gobierno se ha comprometido a prestar más atención a los pobres y a las áreas más abandonadas del país; a aumentar el gasto social como clave para el crecimiento económico sostenido y para un mejor gobierno; a lanzar una estrategia amplia de desarrollo rural para hacer frente a la situación, con frecuencia crítica, de la mayoría de la población rural; y a tomar medidas decisivas para modernizar la administración pública y dotarla de una sólida base financiera.

A lo largo de todo el Acuerdo está presente la visión compartida de que una clave para el mejoramiento definitivo de las cosas es la democratización, una mayor participación en la toma de decisiones sociales y económicas y la construcción de consensos entre todos los sectores de la sociedad. Este énfasis en la democracia, la participación y la construcción de consensos está plenamente sustentado en la doctrina sobre el desarrollo adoptada por las Naciones Unidas y por la comunidad internacional en pleno, como quedó reflejado en las conclusiones de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social celebrada en Copenhague. El Secretario General me ha pedido felicitar a ambas partes por su admirable logro de hoy y a animarlos para construir sobre estos logros mientras avanzan hacia la conclusión del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, que será la culminación de todo este proceso. El Dr. Boutros-Ghali desea rendir tributo, en particular, a la sabiduría y visión política del Presidente Arzú al comprometer su Gobierno en un programa de acción de tal alcance. Ese compromiso proporciona una base sólida para el final definitivo de la confrontación armada y para un nuevo comienzo en el desarrollo del ilimitado potencial del pueblo guatemalteco para crear una sociedad justa, pacífica y próspera.

Por nuestra parte, nosotros en las Naciones Unidas continuaremos haciendo todo lo que esté de nuestra parte para facilitar este proceso. Querría aprovechar esta oportunidad para agradecer a los muchos programas, agencias y organismos de las Naciones Unidas, así como a otras organizaciones internacionales que han proporcionado su asesoramiento a la moderación de Naciones Unidas. En los meses que vienen, y en particular una vez que se llegue a la conclusión de un acuerdo de paz definitivo, es esencial que la amplia coalición internacional que ha surgido para apoyar el proceso de paz de Guatemala redoble sus esfuerzos para ayudar al país a implementar los acuerdos de paz. En esta tarea, la dedicación de los Gobiernos de Colombia, México, Noruega, España, Estados Unidos y Venezuela, tan bien representados aquí, continuará siendo esencial. MINUGUA, cuyas actividades de verificación y apoyo institucional en el contexto de la implementación del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, han jugado un rol crítico en la consolidación del proceso, tendrá que asumir un mandato de verificación más amplio. El Secretario General hará todo lo que esté a su alcance para asegurar que MINUGUA continúe ofreciendo esta inestimable contribución al proceso de paz. Confía en que recibirá el apoyo de los Estados miembros de las Naciones Unidas para este fin.

ACUERDO SOBRE ASPECTOS SOCIOECONOMICOS Y SITUACION AGRARIA

Considerando

Que una paz firme y duradera debe cimentarse sobre un desarrollo socioeconómico orientado al bien común que responda a las necesidades de toda la población.

Que ello es necesario para superar las situaciones de pobreza, extrema pobreza, discriminación y marginación social y política que han obstaculizado y distorsionado el desarrollo social, económico, cultural y político del país, y han constituido fuente de conflicto e inestabilidad.

Que el desarrollo socioeconómico requiere de justicia social, como uno de los cimientos de la unidad y solidaridad nacional y de crecimiento económico con sostenibilidad, como condición para responder a las demandas sociales de la población.

Que en el área rural es necesaria una estrategia integral que facilite el acceso de los campesinos a la tierra y otros recursos productivos, que brinde seguridad jurídica y que favorezca la resolución de conflictos.

Que tanto para el aprovechamiento de las potencialidades productivas de la sociedad guatemalteca como para el logro de una mayor justicia social, es fundamental la participación efectiva de todos los sectores de la sociedad en la solución de sus necesidades y en particular en la definición de las políticas públicas que les conciernen.

Que el Estado debe democratizarse para ampliar estas posibilidades de participación y fortalecerse como orientador del desarrollo nacional, como legislador, como fuente de inversión pública y prestatario de servicios y como promotor de la concertación social y de la resolución de conflictos.

Que el presente acuerdo busca crear o fortalecer los mecanismos y las condiciones que garanticen una participación efectiva de la población

y recoge los objetivos prioritarios de la acción gubernamental para sentar las bases de este desarrollo participativo.

Que la aplicación del presente acuerdo debe propiciar que todas las fuerzas sociales y políticas del país enfrenten en forma solidaria y responsable las tareas inmediatas de la lucha contra la pobreza, la discriminación y los privilegios, construyendo así una Guatemala unida, próspera y justa que permita una vida digna para el conjunto de su población.

El Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (en adelante "las partes") acuerdan lo siguiente:

I. DEMOCRATIZACION Y DESARROLLO PARTICIPATIVO

A. PARTICIPACION Y CONCERTACION SOCIAL

1. Para profundizar una democracia real, funcional y participativa, el proceso de desarrollo económico y social debe ser democrático y participativo y abarcar: (a) la concertación y el diálogo entre los agentes del desarrollo socioeconómico, (b) la concertación entre estos agentes y las instancias del Estado en la formulación y aplicación de las estrategias y acciones de desarrollo y (c) la participación efectiva de los ciudadanos en la identificación, priorización y solución de sus necesidades.

2. La ampliación de la participación social es un baluarte contra la corrupción, los privilegios, las distorsiones del desarrollo y el abuso del poder económico y político en detrimento de la sociedad. Por lo tanto, es un instrumento para erradicar la polarización económica, social y política de la sociedad.

3. Además de constituir un factor de democratización, la participación ciudadana en el desarrollo económico y social es indispensable para el fomento de la productividad y del crecimiento económico, para una mayor equidad en la distribución de la riqueza y para la calificación del potencial humano. Permite asegurar la transparencia de las políticas públicas, su orientación hacia el bien común y no intereses particulares, la protección efectiva de los intereses de los más vulnerables, la eficiencia en la prestación de los servicios y, por ende, el desarrollo integral de la persona.

4. En este espíritu, y en congruencia con los acuerdos ya firmados sobre Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado e Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, las partes coinciden en la importancia de crear o fortalecer mecanismos que permitan que los ciudadanos y los distintos grupos sociales ejerzan efectivamente sus derechos y participen plenamente en la toma de decisiones sobre los diversos asuntos que les afecten o interesen, con plena conciencia y cumpliendo responsablemente con las obligaciones sociales en lo personal y colectivamente.

5. Fortalecer la participación social requiere ofrecer mayores oportunidades a la población organizada en la toma de decisiones socioeconómicas. Esto supone admitir y propiciar todas las formas de organización de la población en las que tengan expresión los diferentes intereses. Requiere, en particular, garantizar plena y efectivamente los derechos de los trabajadores urbanos y rurales y de los campesinos a participar como entes organizados en los procesos de concertación con el sector empresarial o a nivel nacional. Para estos fines, es necesaria la emisión de disposiciones legales y administrativas ágiles para el otorgamiento de la personalidad jurídica u otra forma de reconocimiento legal a las organizaciones que lo soliciten.

6. Esto supone además de un importante esfuerzo para promover una cultura de la concertación y la capacitación de las organizaciones empresariales, laborales y otras para que aumente su capacidad propositiva y negociadora y puedan asumir efectivamente los derechos y las obligaciones inherentes a la participación democrática.

Concertación

7. La concertación social a los niveles nacional, departamental, comunal y de unidades productivas rurales y urbanas es esencial para estimular y estabilizar la dinámica económica y social. Las estructuras del Estado deben adaptarse para llevar a cabo este papel de concertación y conciliación de intereses, a fin de poder operar con eficacia y eficiencia en pro de la modernización productiva y de la competitividad, de la promoción del crecimiento económico y de la eficiente prestación universal de servicios sociales básicos.

Participación a nivel local

8. Teniendo en cuenta que los habitantes de un departamento o municipio, empresarios, trabajadores, cooperativistas o autoridades representativas de las comunidades, pueden definir mejor las medidas que los benefician o los afectan, se debe adoptar un conjunto de instrumentos que institucionalicen la descentralización de la decisión socioeconómica, con transferencia real de recursos económicos gubernamentales y de capacidad para discutir y decidir localmente la asignación de los recursos, la forma de ejecutar los proyectos, las prioridades y las características de los programas o de las acciones gubernamentales. De esta forma, los órganos gubernamentales podrán basar sus acciones en las propuestas que emanen de la conciliación de intereses entre las diferentes expresiones de la sociedad.

9. Mediante el presente acuerdo, el Gobierno se compromete a tomar un conjunto de medidas encaminadas a incrementar la participación de la población en los distintos aspectos de la gestión pública, incluyendo las políticas de desarrollo social y rural. Este conjunto de reformas debe permitir sustituir estructuras que generen conflictividad social por nuevas relaciones que aseguren la consolidación de la paz, como expresión de la armonía en la convivencia y el fortalecimiento de la democracia, como proceso dinámico y perfectible, en el que se pueda constatar un avance en la participación de los distintos grupos sociales en la definición de las opciones políticas, sociales y económicas del país.

10. Para fortalecer las capacidades de participación de la población y al mismo tiempo la capacidad de gestión del Estado, el Gobierno se compromete a:

Comunidades

(a) Promover una reforma al código municipal para que los alcaldes auxiliares sean nombrados por el alcalde municipal, tomando en cuenta las propuestas de los vecinos en cabildo abierto.

Municipios

(b) Propiciar la participación social en el marco de la autonomía municipal, profundizando el proceso de descentralización hacia los gobiernos municipales, con el consiguiente reforzamiento de sus recursos técnicos, administrativos y financieros.

(c) Establecer y ejecutar a breve plazo, en concertación con la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), un programa de capacitación municipal que sirva de marco para los esfuerzos nacionales y la cooperación internacional en la materia. Dicho programa enfatizará la formación de un personal municipal especializado en la ejecución de las nuevas tareas que correspondan al municipio como resultado del proceso de descentralización, con énfasis en las tareas de ordenamiento territorial, catastro, planificación municipal, administración financiera, gestión de proyectos y capacitación de las organizaciones locales para que puedan participar efectivamente en la resolución de sus necesidades.

Departamentos

(d) Promover ante el Congreso una reforma de la Ley de Gobierno de los Departamentos de la República, a fin de que el gobernador departamental sea nombrado por el Presidente de la República tomando en consideración los candidatos propuestos por los representantes no gubernamentales de los Consejos Departamentales de Desarrollo.

Regiones

(e) Regionalizar los servicios de salud, de educación y de cultura de los pueblos indígenas y asegurar la plena participación de las organizaciones indígenas en el diseño e implementación de este proceso.

Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural

(f) Teniendo en cuenta el papel fundamental de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural para asegurar, promover y garantizar la participación de la población en la identificación de las prioridades locales, la definición de los proyectos y programas públicos y la integración de la política nacional de desarrollo urbano y rural, tomar las siguientes medidas:

- (i) Reestablecer los Consejos Locales de Desarrollo.
- (ii) Promover una reforma de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural para ampliar el espectro de sectores participantes en los Consejos Departamentales y Regionales de Desarrollo.
- (iii) Asegurar el debido financiamiento del Sistema de Consejos.

B. PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

11. La participación activa de las mujeres es imprescindible para el desarrollo económico y social de Guatemala y es obligación del Estado promover la eliminación de toda forma de discriminación contra ellas.

12. Reconociendo la contribución, insuficientemente valorada, de las mujeres en todas las esferas de la actividad económica y social, particularmente su trabajo en favor del mejoramiento de la comunidad, las partes coinciden en la necesidad de fortalecer la participación de las mujeres en el desarrollo económico y social, sobre bases de igualdad.

13. Con este fin, el Gobierno se compromete a tomar en cuenta la situación económica y social específica de las mujeres en las estrategias, planes y programas de desarrollo y a formar el personal del servicio civil en el análisis y la planificación basados en este enfoque. Esto incluye:

(a) Reconocer la igualdad de derechos de la mujer y del hombre en el hogar, en el trabajo, en la producción y en la vida social y política y asegurarle las mismas posibilidades que al hombre, en particular para el acceso al crédito, la adjudicación de tierras y otros recursos productivos y tecnológicos.

Educación y capacitación

(b) Garantizar que la mujer tenga igualdad de oportunidades y condiciones de estudio y capacitación y que la educación contribuya a desterrar cualquier forma de discriminación en contra suya en los contenidos educativos.

Vivienda

(c) Garantizar a las mujeres el acceso, en igualdad de condiciones, a vivienda propia, eliminando las trabas e impedimentos que afectan a las mujeres en relación al alquiler, crédito y construcción.

Salud

(d) Implementar programas nacionales de salud integral para la mujer, lo cual implica el acceso a servicios apropiados de información, prevención y atención médica.

Trabajo

- (e) Garantizar el derecho de las mujeres al trabajo, lo que requiere:
 - (i) Impulsar por diferentes medios la capacitación laboral de las mujeres.
 - (ii) Revisar la legislación laboral, garantizando la igualdad de derechos y de oportunidades para hombres y mujeres.
 - (iii) En el área rural, reconocer a las mujeres como trabajadoras agrícolas para efectos de valoración y remuneración de su trabajo.
 - (iv) Legislar para la defensa de los derechos de la mujer trabajadora de casa particular, especialmente en relación con salarios justos, horarios de trabajo, prestaciones sociales y respeto a su dignidad.

Organización y participación

(f) Garantizar el derecho de organización de las mujeres y su participación, en igualdad de condiciones con el hombre, en los niveles de decisión y poder de las instancias local, regional y nacional.

(g) Promover la participación de las mujeres en la gestión gubernamental, especialmente en la formulación, ejecución y control de los planes y políticas gubernamentales.

Legislación

(h) Revisar la legislación nacional y sus reglamentaciones a fin de eliminar toda forma de discriminación contra la mujer en la participación económica, social, cultural y política y dar efectividad a los compromisos gubernamentales derivados de la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

II. DESARROLLO SOCIAL

14. Corresponde al Estado promover, orientar y regular el desarrollo socioeconómico del país de manera que, con el esfuerzo del conjunto de la sociedad, se asegure, en forma integrada, la eficiencia económica, el aumento de los satisfactores sociales y la justicia social. En la búsqueda del crecimiento, la política económica debe orientarse a impedir que se produzcan procesos de exclusión socioeconómica, tales como el desempleo y el empobrecimiento y que, al contrario, se maximicen los beneficios del crecimiento económico para todos los guatemaltecos. En la búsqueda del bienestar de todos los guatemaltecos, la política social debe propiciar el desarrollo económico, mediante su impacto en la producción y la eficiencia.

15. El crecimiento económico acelerado del país es necesario para la generación de empleos y su desarrollo social. El desarrollo social del país es, a su vez, indispensable para su crecimiento económico y una mejor inserción en la economía mundial. Al respecto, la elevación del nivel de vida, la salud de sus habitantes y la educación y capacitación constituyen las premisas para acceder al desarrollo sustentable en Guatemala.

Responsabilidades del Estado

16. El Estado tiene obligaciones indeclinables en la tarea de superación de las iniquidades y deficiencias sociales, tanto mediante la orientación del desarrollo como a través de la inversión pública y de la prestación de servicios sociales universales. Asimismo el Estado tiene obligaciones específicas por mandato constitucional de procurar el goce efectivo, sin discriminación alguna, de los derechos al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda y demás derechos sociales. La superación de los desequilibrios sociales históricos que ha vivido Guatemala y la consolidación de la paz requieren de una política decidida por parte del Estado y del conjunto de la sociedad.

Inversiones productivas

17. El desarrollo socioeconómico del país no puede depender exclusivamente de las finanzas públicas ni de la cooperación internacional. Reclama del incremento de inversiones productivas generadoras de empleos debidamente remunerados. Las partes exhortan a los empresarios nacionales y extranjeros a que inviertan en el país, considerando que la suscripción de un

acuerdo de paz firme y duradera y su puesta en práctica son componentes esenciales de la estabilidad y transparencia que requieren la inversión y la expansión económica.

Producto interno bruto

18. Por su parte, el Gobierno se compromete a adoptar políticas económicas tendientes a alcanzar un crecimiento sostenido del producto interno bruto (PIB) a una tasa no menor del 6% anual, que permita una política social avanzada. Se compromete, al mismo tiempo, a una política social cuyo objetivo sea el bienestar de todos los guatemaltecos, con prioridad en la salud, la nutrición, la educación y capacitación, la vivienda, el saneamiento ambiental y el acceso al empleo productivo e ingresos dignos.

Papel rector del Estado

19. Para cumplir con este objetivo y con el papel rector del Estado en la política social, el Gobierno se compromete a:

(a) Aplicar y desarrollar el marco normativo para garantizar la concreción de los derechos sociales y para la prestación de los servicios sociales por medio de entidades públicas y, cuando sea necesario, por entidades mixtas o privadas; asimismo deberá supervisar su cabal cumplimiento.

(b) Fomentar y garantizar la participación, de acuerdo al marco normativo, de todos los sectores sociales y económicos que puedan cooperar en el desarrollo social y en particular en el acceso integral a los servicios básicos.

(c) Asegurar una prestación eficiente de servicios por el sector público, teniendo en cuenta que la obligación del Estado es asegurar el acceso de la población a servicios de calidad.

20. Para responder a las demandas urgentes de la población, el Gobierno se compromete a:

(a) Aumentar de manera significativa la inversión social, en particular en salud, educación y trabajo.

(b) Reestructurar el presupuesto en beneficio del gasto social.

(c) Priorizar a los sectores de la sociedad más necesitados y las áreas del país más desprovistas, sin desatender a los otros sectores de la sociedad.

(d) Mejorar la administración de los recursos e inversiones públicos, mediante su descentralización, desconcentración y desburocratización, reformando los mecanismos de ejecución presupuestaria asegurando su autonomía en las decisiones y el manejo financiero a fin de garantizar su eficiencia y transparencia y fortaleciendo los mecanismos de fiscalización y auditoría.

A. EDUCACION Y CAPACITACION

21. La educación y la capacitación cumplen papeles fundamentales para el desarrollo económico, cultural, social y político del país. Son esenciales para una estrategia de equidad y unidad nacional y son determinantes en la modernización económica y en la competitividad internacional. Por ello, es necesaria la reforma del sistema educativo y su administración, así como la aplicación de una política estatal coherente y enérgica en materia educativa, de manera que se alcancen los siguientes objetivos:

(a) Afirmar y difundir los valores morales y culturales, los conceptos y comportamientos que constituyen la base de una convivencia democrática respetuosa de los derechos humanos, de la diversidad cultural de Guatemala, del trabajo creador de su población y de la protección del medio ambiente, así como de los valores y mecanismos de la participación y concertación ciudadana social y política, lo cual constituye la base de una cultura de paz.

(b) Evitar la perpetuación de la pobreza y de las discriminaciones sociales, étnicas, hacia la mujer y geográficas, en particular las debidas a la brecha campo-ciudad.

(c) Contribuir a la incorporación del progreso técnico y científico y, por consiguiente, al logro de crecientes niveles de productividad, de una mayor generación de empleo y de mejores ingresos para la población y a una provechosa inserción en la economía mundial.

22. En atención a las necesidades en materia de educación, el Gobierno se compromete a:

Gasto educativo

(a) Aumentar significativamente los recursos destinados a la educación. Como mínimo el Gobierno se propone incrementar, para el año 2000, el gasto público ejecutado en educación en relación con el PIB en 50% respecto del gasto ejecutado en 1995. Estas metas se revisarán al alza en función de la evolución de la situación fiscal.

Adecuación de los contenidos educativos

(b) Adecuar los contenidos educativos a los objetivos enunciados en el numeral 21. Esta adecuación recogerá los resultados de la Comisión de Reforma Educativa establecida en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.

Cobertura

(c) Ampliar urgentemente la cobertura de los servicios de educación en todos los niveles y específicamente la oferta de educación bilingüe en el medio rural, mediante:

i) La incorporación de la población de edad escolar al sistema educativo, procurando que completen los ciclos de pre-primaria y primaria y el primer ciclo de educación secundaria; en particular, el Gobierno se compromete a facilitar el acceso de toda la población entre 7 y 12 años de edad, a por lo menos tres años de escolaridad, antes del año 2000.

ii) Programas de alfabetización en todos los idiomas que sean técnicamente posibles, con la participación de las organizaciones indígenas capacitadas para este objetivo; el Gobierno se compromete a ampliar el porcentaje de alfabetismo a un 70% para el año 2000.

iii) Programas de educación, capacitación y tecnificación de adultos.

Capacitación para el trabajo

(d) Desarrollar, con metodologías adecuadas y eficientes, programas de capacitación en las comunidades y empresas para la reconversión y actualización técnica de los trabajadores, con énfasis en pobladores de áreas marginadas y de las comunidades rurales, con el apoyo de los sectores que puedan cooperar con este empeño.

Capacitación para la participación social

(e) Capacitar a las organizaciones sociales a nivel municipal, regional y nacional para la participación en el desarrollo socioeconómico, incluyendo lo relativo a la gestión pública, a la responsabilidad tributaria y a la concertación.

Programa de educación cívica

(f) Elaborar y ejecutar un programa de educación cívica nacional para la democracia y la paz que promueva la defensa de los derechos humanos, la renovación de la cultura política y la solución pacífica de los conflictos. En este programa se solicitará la participación de los medios de comunicación social.

Interacción comunidad-escuela y participación comunitaria

(g) Para favorecer la incorporación de los niños al sistema educativo y su retención, hacer efectiva la participación de las comunidades y de los padres de familia en los distintos aspectos del servicio de educación y capacitación (contenidos educativos, nombramiento de los maestros, calendario escolar, entre otros).

Apoyo financiero

(h) Desarrollar programas de becas, bolsas de estudio, apoyos económicos y otro tipo de incentivos que posibiliten la continuidad en la formación educativa de estudiantes necesitados.

Capacitación de administradores educativos

(i) Desarrollar programas de capacitación permanente para maestros y administradores educativos.

Comisión consultiva

(j) Para la elaboración y realización de la reforma de la educación a cargo del Ministerio de Educación, se integrará una comisión consultiva adscrita al Ministerio, integrada por participantes en el proceso educativo, incluyendo una representación de la Comisión de Reforma Educativa prevista por el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.

Educación superior e investigación

(k) La educación superior del Estado, cuya dirección, organización y desarrollo le corresponde con exclusividad a la Universidad de San Carlos de Guatemala, es un factor clave para alcanzar el crecimiento económico, la equidad social, la difusión de la cultura y el incremento del acervo tecnológico de la nación. El Gobierno de la República se compromete a entregar puntualmente a la USAC la asignación privativa que por mandato constitucional le corresponde. Respetuosos de la autonomía de la USAC, las partes exhortan a las autoridades de la máxima casa de estudios para que favorezcan todas las iniciativas que incrementen su aporte al desarrollo del país y consoliden la paz. El Gobierno se compromete a corresponder y atender esos aportes y esas iniciativas. Particularmente se valora el desarrollo de sus centros regionales y de sus programas de ejercicio profesional supervisado, con énfasis en las áreas de mayor pobreza. De la misma forma, exhortan a los sectores empresariales a que dediquen crecientes esfuerzos a la investigación tecnológica aplicada y a la formación de recursos humanos, estrechando sus vínculos de intercambio con la USAC.

Promotoras y promotores de educación

(l) En cumplimiento del Acuerdo de Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado y del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, deberá incorporarse a las promotoras y promotores de educación de las comunidades al sistema nacional de educación y respetarse los contenidos educativos propios de las comunidades indígenas y de las poblaciones desarraigadas.

B. SALUD

23. Las partes coinciden en la necesidad de impulsar una reforma del sector nacional de salud. Dicha reforma debe ser orientada hacia el efectivo ejercicio por la población del derecho fundamental a la salud, sin discriminación alguna y el efectivo desempeño por el Estado, dotado de los recursos necesarios, de su obligación sobre salud y asistencia social. Entre los lineamientos de dicha reforma están los siguientes:

Concepción

(a) Basarse en una concepción integral de la salud (prevención, promoción, recuperación y rehabilitación), una práctica humanista y solidaria que enfatice el espíritu de servicio, aplicado a todos los niveles del sector público de salud del país.

Sistema nacional coordinado de salud

(b) Es atribución del Ministerio de Salud la formulación de políticas que permitan el acceso de toda la población guatemalteca a los servicios integrales de salud. Bajo la coordinación del Ministerio de Salud, concertar con instituciones públicas, incluyendo el IGSS, privadas y no gubernamentales que intervienen en este sector, la puesta en práctica de las acciones que permitan universalizar el acceso de toda la población guatemalteca a los servicios integrales de salud.

Población de bajos recursos

(c) Crear las condiciones para garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad a la población de bajos recursos. El Gobierno se compromete a aumentar los recursos destinados a la salud. Como mínimo, el Gobierno se propone que el gasto público ejecutado en salud con relación al PIB, para el año 2000, sea incrementado en 50% respecto del gasto ejecutado en 1995. Esta meta será revisada al alza en función de la evolución de la situación fiscal.

Prioridades de atención

(d) Dar prioridad a la lucha contra la desnutrición, al saneamiento ambiental, la salud preventiva, las soluciones de atención

primaria, especialmente la materno-infantil. El Gobierno se compromete a presupuestar por lo menos 50% del gasto público en salud a la atención preventiva y se compromete a reducir la mortalidad infantil y materna, antes del año 2000, a un 50% del índice observado en 1995. Asimismo, el Gobierno se compromete a mantener la certificación de erradicación de la poliomielitis y alcanzar la del sarampión para el año 2000.

Medicamentos, equipos e insumos

(e) El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social revisará las normas y prácticas vigentes en materia de producción y comercialización de medicamentos, equipos e insumos y promoverá las medidas que aseguren el abastecimiento, abaratamiento y calidad de los mismos. Para el caso de los medicamentos básicos o genéricos de mayor demanda en el sector público, se estudiarán y aplicarán modalidades de compra que aseguren transparencia en la negociación comercial, calidad y bajo precio de los medicamentos para garantizar la prestación eficiente de servicios.

Medicina indígena y tradicional

(f) Valorándose la importancia de la medicina indígena y tradicional, se promoverá su estudio y rescatarán sus concepciones, métodos y prácticas.

Participación social

(g) Fomentar la participación activa de las municipalidades, las comunidades y las organizaciones sociales (incluyendo las de mujeres, indígenas, sindicales, cívicas, humanitarias) en la planificación, ejecución y fiscalización de la administración de los servicios y programas de salud, a través de los sistemas locales de salud y los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

Descentralización y desconcentración administrativa

(h) La organización descentralizada de los distintos niveles de atención debe asegurar la existencia de programas y servicios de salud a nivel comunal, regional y nacional, base del sistema nacional coordinado de salud.

C. SEGURIDAD SOCIAL

24. La seguridad social constituye un mecanismo de solidaridad humana con el cual se contribuye al bienestar social y se sientan las bases para la estabilidad, el desarrollo económico, la unidad nacional y la paz. De acuerdo con la Constitución Política de la República, la aplicación del régimen de seguridad social corresponde al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que es una entidad autónoma. Las partes consideran que deben tomarse medidas correspondientes a efecto de ampliar su cobertura, mejorar sus prestaciones y la amplitud de sus servicios con calidad y eficiencia. Para ello, hay que considerar:

(a) Garantizar una gestión administrativa plenamente autónoma del IGSS, en aplicación del principio constitucional de coordinación con las instituciones de salud, en el marco del sistema nacional coordinado de salud.

(b) De acuerdo con el convenio de OIT ratificado por Guatemala, la seguridad social debe comprender programas de asistencia médica y prestaciones relacionadas con enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, sobrevivencia, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, empleo y familiares.

(c) Fortalecer y garantizar la aplicación de los principios de eficiencia, universalidad, unidad y obligatoriedad, en el funcionamiento del IGSS.

(d) Fortalecer la solvencia financiera del IGSS mediante un sistema de control tripartito de contribuciones.

(e) Promover nuevas formas de gestión del IGSS con la participación de sus sectores constitutivos.

(f) Hacer efectiva la inserción del IGSS en el sistema coordinado de salud.

(g) Crear condiciones que faciliten la incorporación plena de todos los trabajadores a la seguridad social.

D. VIVIENDA

25. Se reconoce la necesidad de llevar a cabo, de acuerdo con el mandato constitucional, una política de fomento con prioridad en la construcción de vivienda popular mediante sistemas de financiamiento adecuados, a efecto de que el mayor número de familias guatemaltecas la disfrute en propiedad. Para ello, el Gobierno se compromete a:

Planificación

(a) Llevar a cabo una estrecha articulación con políticas de ordenamiento territorial, en particular planificación urbana y protección ambiental, que permita el acceso de los pobres a la vivienda con servicios y en condiciones de higiene y sostenibilidad ambiental.

Normas

(b) Actualizar las normas de salubridad y seguridad aplicables a la construcción y supervisar su cumplimiento; coordinar con las municipalidades del país para que existan normas homogéneas, claras y sencillas para la construcción y supervisión, persiguiendo la buena calidad y adecuada seguridad de la vivienda.

Oferta

(c) Promover una política de incremento de la oferta de vivienda en el país que contribuya al mejoramiento del acceso a soluciones habitacionales en propiedad o en alquiler a los sectores de menores recursos de la población.

(d) Incentivar la oferta de servicios, soluciones habitacionales y material de construcción de calidad y costo adecuados; en este contexto, aplicar normas antimonopolio en la producción y comercialización de materiales y servicios de construcción de conformidad con el artículo 130 de la Constitución.

Financiamiento y facilidades

(e) Poner en práctica acciones de política monetaria que permitan reducir significativamente el costo del crédito.

(f) Promover y facilitar el mercado de valores para la adquisición de vivienda, incluyendo la hipoteca de primero y segundo grados, facilitar la compraventa de títulos-valores emitidos con motivo de las operaciones de vivienda, incluyendo acciones comunes y preferenciales de empresas inmobiliarias, bonos y cédulas hipotecarias, certificados de participación inmobiliaria, letras complementarias, pagarés y otros documentos relacionados con el arrendamiento con promesa de venta.

(g) Diseñar y aplicar un mecanismo de subsidio directo a la demanda de vivienda popular, en beneficio de los más necesitados. Para ello, fortalecer el FOGUAVI a fin de que mejore su capacidad de otorgar recursos financieros para la población pobre y en extrema pobreza.

Participación

(h) Estimular la creación y fortalecimiento de sistemas de participación comunitaria, tales como cooperativas y empresas autogestionarias y familiares, que aseguren la incorporación de los beneficiarios en la ejecución de los planes y construcción de viviendas y servicios.

Regularización

(i) Promover la legalización, acceso y registro de terrenos, no solamente alrededor de la ciudad de Guatemala, sino también para el desarrollo urbano en las cabeceras y municipios del país, así como la ejecución de proyectos habitacionales en aldeas y fincas, especialmente para vivienda rural.

Compromiso nacional

(j) En vista de la magnitud y urgencia del problema habitacional, se deben movilizar los esfuerzos nacionales al respecto. El Gobierno se compromete a dedicar a la política de fomento de la vivienda el equivalente a no menos del 1.5% del Presupuesto de Ingresos Tributarios, a partir de 1997, con prioridad al subsidio de la demanda de soluciones habitacionales de tipo popular.

E. TRABAJO

26. El trabajo es fundamental para el desarrollo integral de la persona, el bienestar familiar y el desarrollo socioeconómico del país. Las relaciones laborales son un elemento esencial de la participación social en el desarrollo socioeconómico y de la eficiencia económica. En este sentido, la política del Estado en materia de trabajo es determinante para una estrategia de crecimiento con justicia social. Para llevar a cabo dicha política, el Gobierno se compromete a:

Política económica

(a) Mediante una política económica orientada a incrementar la utilización de mano de obra, crear las condiciones que permitan alcanzar niveles crecientes y sostenidos de ocupación, reduciendo fundamentalmente el subempleo estructural y permitiendo elevar progresivamente el ingreso real de los trabajadores.

(b) Propiciar medidas concertadas con los distintos sectores sociales, tendientes a incrementar la inversión y la productividad, en el marco de una estrategia general de crecimiento con estabilidad y equidad social.

Legislación laboral tutelar

(c) Promover, en el curso del año 1996, los cambios legales y reglamentarios que hagan efectivas las leyes laborales y sancionar severamente sus infracciones, incluyendo aquellas referentes al salario mínimo, el no pago, retención y retraso de salarios, las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo y el ambiente en que deba prestarse.

(d) Desconcentrar e incrementar los servicios de inspección laboral que fortalezcan la capacidad de fiscalización del cumplimiento de las normas laborales de derecho interno y las derivadas de los convenios internacionales de trabajo ratificados por Guatemala, prestando particular atención a la fiscalización del cumplimiento de los derechos laborales de mujeres, trabajadores agrícolas, migrantes y temporales, trabajadores de casa particular, menores de edad, ancianos, discapacitados y demás trabajadores que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad y desprotección.

Capacitación laboral

(e) Instaurar un proceso permanente y moderno de capacitación y formación profesional que garantice la formación a todo nivel y el correspondiente incremento de la productividad, a través de un proyecto de ley que norme la formación profesional a nivel nacional.

(f) Promover que los programas de capacitación y formación profesional a nivel nacional atiendan a por lo menos 200,000 trabajadores antes del año 2000, con énfasis en quienes se incorporan a la actividad económica y en quienes requieren de adiestramiento especial para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado laboral.

Ministerio de Trabajo

(g) Fortalecer y modernizar el Ministerio de Trabajo y Previsión Social garantizando su papel rector en las políticas gubernamentales relacionadas con el sector del trabajo y su eficaz desempeño en la promoción del empleo y de la concertación laboral. Para el efecto, le corresponde:

Participación, concertación y negociación

- (i) Promover la reorientación de las relaciones laborales en las empresas impulsando la cooperación y la concertación trabajadores-empleadores que procuren el desarrollo de la empresa para beneficio común, inclusive la posible participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas empleadoras de los mismos.
- (ii) Agilizar los procedimientos para el reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones laborales.
- (iii) Para el caso de trabajadores agrícolas aún sujetos a contratación mediante contratistas, se propondrán reformas tendientes al reconocimiento jurídico, ágil y flexible de formas asociativas que permitan negociar dicha contratación.
- (iv) Promover una cultura de la negociación y, en particular, la capacitación de los interlocutores para dirimir disputas y concertar acciones en beneficio de las partes involucradas.

III. SITUACION AGRARIA Y DESARROLLO RURAL

27. La resolución de la problemática agraria y el desarrollo rural son fundamentales e ineludibles para dar respuesta a la situación de la mayoría de la población que vive en el medio rural, y que es la más afectada por la pobreza, la pobreza extrema, las iniquidades y la debilidad de las instituciones estatales. La transformación de la estructura de la tenencia y el uso de la tierra debe tener como objetivo la incorporación de la población rural al desarrollo económico, social y político, a fin de que la tierra constituya para quienes la trabajan, base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad.

28. Dentro de la problemática del desarrollo rural, la tierra tiene un carácter central. Desde la conquista hasta nuestros días, los acontecimientos históricos, a menudo trágicos, han dejado secuelas profundas en las relaciones étnicas, sociales y económicas alrededor de la propiedad y de la explotación del recurso tierra. Han llevado a una situación de concentración de recursos que contrasta con la pobreza de la mayoría, lo cual obstaculiza el desarrollo del país en su conjunto. Es indispensable subsanar y superar este legado, promover un agro más eficiente y más equitativo, fortaleciendo el potencial de todos sus actores, no solamente en el ámbito de las capacidades productivas sino también en la profundización de las culturas y los sistemas de valores que conviven e intercambian en el campo guatemalteco.

29. Estos cambios permitirán que el país aproveche efectivamente las capacidades de sus habitantes y, en particular, la riqueza de las tradiciones y culturas de sus pueblos indígenas. Que aproveche asimismo el alto potencial de desarrollo agrícola, industrial, comercial y turístico de dichos recursos, debido a su riqueza de recursos naturales.

30. La resolución de la situación agraria es un proceso complejo que abarca múltiples aspectos de la vida rural, desde la modernización de las modalidades de producción y de cultivo, hasta la protección del ambiente, pasando por la seguridad de la propiedad, la adecuada utilización de la tierra y del trabajo, la protección laboral y una distribución más equitativa de los recursos y beneficios del desarrollo. Se trata también de un proceso social cuyo éxito reposa no sólo sobre el Estado sino sobre una convergencia de esfuerzos por

parte de los sectores organizados de la sociedad, conscientes que el bien común requiere romper con los esquemas y prejuicios del pasado y buscar formas nuevas y democráticas de convivencia.

31. Corresponde al Estado un papel fundamental y urgente en este proceso. Como orientador del desarrollo nacional, como legislador, como fuente de inversión pública y prestatario de servicios, como promotor de la concertación social y de la resolución de conflictos, es esencial que el Estado aumente y reoriente sus esfuerzos y sus recursos hacia el campo e impulse en forma sostenida una modernización agraria en la dirección de una mayor justicia y de una mayor eficiencia.

32. Los acuerdos ya firmados sobre derechos humanos, sobre reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado e identidad y sobre derechos de los pueblos indígenas, contienen compromisos que constituyen elementos indispensables de una estrategia global en favor del desarrollo rural. Es en congruencia con estas disposiciones que el Gobierno se compromete, mediante el presente acuerdo, a impulsar una estrategia integral que abarque los múltiples elementos que conforman la estructura agraria y que incluyen la tenencia de la tierra y el uso de los recursos naturales; los sistemas y mecanismos de crédito; el procesamiento y la comercialización; la legislación agraria y la seguridad jurídica; las relaciones laborales; la asistencia técnica y la capacitación; la sostenibilidad de los recursos naturales y la organización de la población rural. Dicha estrategia incluye:

A. PARTICIPACION

33. Movilizar las capacidades propositivas y constructivas de todos los actores involucrados en el agro, ya se trate de las organizaciones de los pueblos indígenas, de asociaciones de productores, de los empresarios, de los sindicatos de trabajadores rurales, de las organizaciones campesinas y de mujeres o de las universidades y centros de investigación del país. Para ello, además de lo dispuesto en otros capítulos del presente acuerdo, el Gobierno se compromete a:

(a) Fortalecer la capacidad de las organizaciones rurales, tales como Empresas Campesinas Asociativas (ECA), cooperativas, asociaciones campesinas, empresas mixtas y empresas autogestionarias y familiares, de participar plenamente en la toma de decisiones sobre todos los asuntos que les conciernen y crear o reforzar las instituciones del Estado, especialmente las del

sector público agrícola, activas en el desarrollo rural a fin de que propicien esta participación, promoviendo en particular el pleno acceso de las mujeres a la toma de decisiones. Ello fortalecerá la eficiencia de la acción estatal y su congruencia con las necesidades de las áreas rurales. Se promoverá, en particular, la participación en los Consejos de Desarrollo, como instrumento de elaboración participativa de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.

(b) Fortalecer y ampliar la participación de organizaciones campesinas, mujeres del campo, organizaciones indígenas, cooperativas, gremiales de productores y ONGs, en el Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario (CONADEA), como el principal mecanismo de consulta, coordinación y participación social en la toma de decisiones para el desarrollo rural y en particular para el cumplimiento del presente capítulo.

B. ACCESO A TIERRA Y RECURSOS PRODUCTIVOS

34. Promover el acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra y uso sostenible de los recursos del territorio. Para ello, el Gobierno tomará las siguientes medidas:

Acceso a la propiedad de la tierra: Fondo de Tierras

(a) Crear un Fondo fideicomiso de Tierras dentro de una institución bancaria participativa para la asistencia crediticia y el fomento del ahorro preferentemente a micro, pequeños y medianos empresarios. El Fondo de Tierras concentrará la potestad del financiamiento público de adquisición de tierras, propiciará el establecimiento de un mercado transparente de tierras y facilitará el desarrollo de planes de reordenamiento territorial. La política de adjudicación del Fondo priorizará la adjudicación de tierras a campesinos y campesinas que se organicen para el efecto, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad económica y ambiental.

(b) Para asegurar que sus beneficios lleguen a los sectores más necesitados, el Fondo de Tierras contará con un departamento especial de asesoría y gestión para atender a las comunidades y organizaciones campesinas.

(c) El Fondo se conformará inicialmente con las siguientes tierras:

- (i) Tierra de baldíos nacionales y de fincas registradas a nombre de la nación.
- (ii) Tierras nacionales entregadas en forma irregular en zonas de colonización, especialmente en el Petén y la Franja Transversal del Norte, que el Gobierno se compromete a recuperar mediante acciones legales.
- (iii) Tierras que se adquieran con los recursos que el Gobierno está destinando a FONATIERRA Y FONAPAZ para tal finalidad.
- (iv) Tierras que se adquieran con donativos de gobiernos amigos y ONGs internacionales.
- (v) Tierras que se adquieran con préstamos de organismos financieros internacionales.
- (vi) Tierras ociosas que se expropian de acuerdo con el artículo 40 de la Constitución.
- (vii) Tierras que se adquieran con recursos provenientes de la venta de excesos de tierras que pudieran resultar en las propiedades privadas al comparar la medida real con la superficie registrada en el Registro de la Propiedad Inmueble, y que corresponden al Estado.
- (viii) Tierras que pudiera adquirir el Estado en aplicación del artículo 40 del Decreto 1551 referente a zonas de desarrollo agrario.
- (ix) Tierras que el Estado pudiera adquirir por cualquier título.
- (x) Donaciones de todo tipo.

(d) El Gobierno promoverá y promulgará una ley que regule todas las actividades del Fondo de Tierras. Dicha ley establecerá, entre otros, los objetivos, funciones, mecanismos de financiamiento y adquisición y adjudicación, origen y destino de las tierras. Para 1999, se evaluará si las adjudicaciones han logrado sus objetivos y, si fuera necesario, se modificará la operatividad del programa de adjudicaciones.

Acceso a la propiedad de la tierra: Mecanismos financieros

(e) Propiciar la creación de todos los mecanismos posibles para desarrollar un mercado activo de tierras que permita la adquisición de tierras para los campesinos que no la poseen o la poseen en cantidad insuficiente, a través de transacciones de largo plazo a tasas de interés comerciales o menores y con un mínimo o sin enganche. En particular, propiciar la emisión de valores hipotecarios, con garantía del Estado, cuyo rendimiento sea atractivo para el mercado privado y particularmente para las instituciones financieras.

Acceso al uso de recursos naturales

(f) Para 1999, haber otorgado a pequeños y medianos campesinos legalmente organizados, en concesiones de manejo de recursos naturales, 100,000 hectáreas dentro de áreas de uso múltiple para fines de manejo forestal sostenible, administración de áreas protegidas, ecoturismo, protección de fuentes de agua y otras actividades compatibles con el uso potencial sostenible de los recursos naturales de dichas áreas.

(g) Promover y apoyar la participación del sector privado y las organizaciones comunitarias de base en proyectos de manejo y conservación de recursos naturales renovables a través de incentivos, subsidios directos focalizados o mecanismos de financiamiento en condiciones blandas, en consideración de los beneficios no monetarios que dichos proyectos aportan a la colectividad nacional. En consideración del beneficio que constituye para la comunidad internacional el manejo sostenible y la conservación del patrimonio forestal y biogenético del país, el Gobierno promoverá activamente la cooperación internacional con este empeño.

Acceso a otros proyectos productivos

(h) Desarrollar proyectos productivos sostenibles, especialmente orientados a aumentar la productividad y la transformación de productos agropecuarios, forestales y pesqueros, en las zonas más pobres del país. En particular, para el período 1997-2000, en las zonas de mayor índice de pobreza, garantizar la ejecución de un programa de inversiones del sector público agropecuario en las cadenas productivas vinculadas a la agricultura, silvicultura y pesca por un monto global de Q200 millones.

(i) Impulsar un programa de manejo de recursos naturales renovables que incentive la producción forestal y agroforestal sostenible,

así como proyectos de artesanía, pequeña y mediana industria que den valor agregado a productos del bosque.

(j) Impulsar oportunidades productivas relacionadas con procesamiento agroindustrial, comercialización, servicios, artesanía y turismo, entre otros, buscando la generación de empleo y un justo ingreso para todos.

(k) Impulsar un programa de desarrollo ecoturístico, con amplia participación de las comunidades debidamente capacitadas.

C. ESTRUCTURA DE APOYO

35. Además de un acceso más equitativo a los recursos productivos, una estructura agraria más eficiente y más justa supone el desarrollo de una estructura de apoyo que permita que los campesinos tengan creciente acceso a facilidades de comercialización, información, tecnología, capacitación y crédito. Además de los compromisos de inversión social, particularmente en salud, educación, vivienda y trabajo, estipulados en el capítulo sobre Desarrollo Social, el Gobierno se compromete a:

Infraestructura básica

(a) Conducir la inversión pública y generar un marco que estimule la inversión privada hacia el mejoramiento de la infraestructura para la producción sostenible y comercialización, especialmente en áreas de pobreza y pobreza extrema.

(b) Elaborar un programa de inversiones para el desarrollo rural con énfasis en infraestructura básica (carreteras, caminos rurales, electricidad, telecomunicaciones, agua y saneamiento ambiental) y de proyectos productivos por un monto de Q300 millones anuales para el período 1997-1999.

Crédito y servicios financieros

(c) Iniciar a más tardar en 1997 las operaciones del Fondo de Tierras y promover simultáneamente las condiciones que permitan a los pequeños y medianos campesinos acceder a recursos de crédito, de forma

individual o colectiva y de una manera financieramente sostenible. En particular, con el apoyo del sector empresarial y de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, se propiciará el fortalecimiento de agencias locales de ahorro y crédito, tales como asociaciones, cooperativas y otras, que permitan la canalización de crédito y el ofrecimiento de servicios financieros a pequeños y medianos empresarios en forma eficiente y ajustada a las necesidades y condiciones locales.

Capacitación y asistencia técnica

(d) Fortalecer, descentralizar y ampliar la cobertura de los programas de capacitación, especialmente aquellos destinados a mejorar la capacidad de gestión empresarial a distintos niveles en el área rural, incorporando como vehículos de esta acción al sector privado y a las organizaciones no gubernamentales.

(e) Desarrollar programas de asistencia técnica y capacitación para el trabajo que incrementen la calificación, diversificación y productividad de la mano de obra en el área rural.

Información

(f) Desarrollar un sistema de recopilación, sistematización y difusión de información agropecuaria, forestal, agroindustrial y de pesca, que permita al pequeño productor contar con información para sus decisiones en materia de cultivos, insumos, cosechas, precios y comercialización.

Comercialización

(g) Para facilitar el procesamiento y la comercialización de la producción campesina y la generación de mayor empleo rural, desarrollar un sistema de centros de acopio y zonas francas.

D. ORGANIZACION PRODUCTIVA DE LA POBLACION RURAL

36. La organización de la población rural es un factor determinante para que los habitantes del campo se conviertan en verdaderos protagonistas de su propio desarrollo. Reconociendo el papel fundamental de la pequeña y mediana empresa en la lucha contra la pobreza, la generación de empleo rural y la promoción de un uso más eficiente de la tierra, es necesario promover una organización más eficiente de los pequeños productores para que puedan, en particular, aprovechar la estructura de apoyo descrita en el numeral 35. Para ello, el Gobierno se compromete a:

(a) Apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa agrícola y rural, fortaleciendo sus diversas formas de organización, tales como Empresas Campesinas Asociativas (ECA), cooperativas, asociaciones campesinas, empresas mixtas y empresas autogestionarias y familiares.

(b) Afrontar el problema del minifundio mediante:

- (i) Una política firme y sostenida de apoyo a los minifundistas para que se conviertan en pequeños empresarios agrícolas, mediante acceso a capacitación, tecnología, crédito y otros aportes.
- (ii) Promover, si los minifundistas lo desean, una concentración parcelaria en aquellos casos en que la conversión en pequeñas empresas no sea posible debido a la dispersión y tamaño de las propiedades.

E. MARCO LEGAL Y SEGURIDAD JURIDICA

37. Guatemala requiere de una reforma del marco jurídico del agro y de un desarrollo institucional en el área rural que permita poner fin a la desprotección y el despojo que han afectado a los campesinos y, en particular, a los pueblos indígenas; que permita la plena integración de la población campesina a la economía nacional y que regule el uso de la tierra en forma eficiente y ecológicamente sostenible de acuerdo a las necesidades del desarrollo. Con este fin y tomando en cuenta en todos los casos las disposiciones del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el Gobierno se compromete a:

Reforma legal

(a) Promover una reforma legal que establezca un marco jurídico seguro, simple y accesible a toda la población con relación a la tenencia de la tierra. Dicha reforma deberá simplificar los procedimientos de titulación y registro del derecho de propiedad y demás derechos reales así como simplificar los trámites y procedimientos administrativos y judiciales.

(b) Promover la creación de una jurisdicción agraria y ambiental dentro del Organismo Judicial mediante la emisión de la ley correspondiente por el Congreso de la República.

(c) Promover una revisión y adecuación de la legislación sobre tierras ociosas de manera que cumpla con lo estipulado en la Constitución y regular, incluyendo incentivos y sanciones, la sub-utilización de las tierras y su uso incompatible con la utilización sostenible de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente.

(d) Proteger las tierras ejidales y municipales, en particular limitando estrictamente y de manera pormenorizada los casos en que se puedan enajenar o entregar por cualquier título a particulares.

(e) En cuanto a tierras comunales, normar la participación de las comunidades para asegurar que sean éstas quienes tomen las decisiones referentes a sus tierras.

Resolución expedita de los conflictos de tierra

(f) Establecer y aplicar procedimientos judiciales o no judiciales ágiles para dirimir los litigios sobre tierra y otros recursos naturales (en particular arreglo directo y conciliación), teniendo en cuenta los compromisos del Acuerdo sobre Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado y el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Además, establecer procedimientos que permitan:

- (i) Definir fórmulas compensatorias en caso de litigios y reclamos de tierra en los que agricultores, campesinos y comunidades en situación de extrema pobreza han resultado o resultaren desposeídos por causas no imputables a ellos.
- (ii) Restituir o compensar, según el caso, al Estado, las municipalidades, comunidades o personas cuyas tierras hayan sido usurpadas, o que con abuso de autoridad hayan sido adjudicadas de manera anómala o injustificada.

(g) Regularizar la titulación de las tierras de las comunidades indígenas y de los beneficiarios del INTA que poseen legítimamente las tierras otorgadas.

Institucionalidad

(h) Para 1997, haber puesto en marcha una Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos sobre la Tierra con

cobertura nacional y con funciones de asesoría y asistencia legal a los campesinos y trabajadores agrícolas para hacer valer plenamente sus derechos y, entre otras, las siguientes:

- (i) Asesorar y dar asistencia legal a los campesinos y trabajadores agrícolas y/o a sus organizaciones cuando así lo soliciten.
- (ii) Intervenir en controversias sobre tierras a solicitud de parte para lograr soluciones justas y expeditas.
- (iii) En el caso de litigios judiciales, otorgar asesoría y asistencia legal gratuita a los campesinos y/o sus organizaciones que lo soliciten.
- (iv) Recibir denuncias sobre abusos que se cometan en contra de las comunidades, de las organizaciones campesinas y de los campesinos individuales y hacerlas del conocimiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos y/o de cualquier otro mecanismo de verificación nacional o internacional.

G. REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y CATASTRO

38. Con base a lo dispuesto en el numeral 37, el Gobierno se compromete a promover cambios legislativos que permitan el establecimiento de un sistema de registro y catastro descentralizado, multiusuario, eficiente, financieramente sostenible y de actualización fácil y obligatoria. Asimismo, el Gobierno se compromete a iniciar, a más tardar en enero de 1997, el proceso de levantamiento de información catastral y saneamiento de la información registro-catastral, empezando por zonas prioritarias, particularmente para la aplicación del numeral 34 sobre acceso a tierras y otros recursos productivos.

H. PROTECCIÓN LABORAL

39. El Gobierno se compromete a promover una mejor participación de los trabajadores rurales en los beneficios del agro y una reorientación de las relaciones laborales en el campo. Pondrá particular énfasis en la aplicación a

los trabajadores rurales de la política laboral definida en el capítulo correspondiente del presente acuerdo. Una política de protección laboral enérgica, combinada con una política de capacitación laboral, responde a una exigencia de justicia social. Es también necesaria para atacar la pobreza rural y estimular una transformación agraria hacia un uso más eficiente de los recursos naturales y humanos. En virtud de ello, el Gobierno se compromete a:

- (a) Asegurar la vigencia efectiva de la legislación laboral en las áreas rurales.
- (b) Prestar atención urgente a las prácticas abusivas de las cuales son víctimas los trabajadores rurales migrantes, mozos colonos y jornaleros en el contexto de la contratación por intermediario, medianía, pago en especie y uso de pesas y medidas. El Gobierno se compromete a adoptar sanciones administrativas y/o penales contra los infractores.
- (c) Promover las reformas de los trámites de reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones campesinas, con miras a agilizar y simplificar dicho reconocimiento, aplicando el convenio 141 de la OIT sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975.

I. PROTECCION AMBIENTAL

40. La riqueza natural de Guatemala es un valioso activo del país y de la humanidad, además de un valor cultural y espiritual esencial para los pueblos indígenas. El país cuenta con una diversidad biogenética y forestal cuya explotación irracional pone en riesgo un entorno humano que facilite el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es entendido como un proceso de cambio en la vida del ser humano, por medio del crecimiento económico con equidad social y métodos de producción y patrones de consumo que sustenten el equilibrio ecológico. Este proceso implica respeto a la diversidad étnica y cultural y garantía a la calidad de vida de las generaciones futuras.

41. En este sentido, y en congruencia con los principios de la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, el Gobierno reitera los siguientes compromisos:

- (a) Adecuar los contenidos educativos y de los programas de capacitación y asistencia técnica a las exigencias de la sostenibilidad ambiental.

- (b) Dar la prioridad al saneamiento ambiental en la política de salud.
- (c) Articular las políticas de ordenamiento territorial y en particular la planificación urbana, con la protección ambiental.
- (d) Promover programas de manejo sostenible de los recursos naturales, generadores de empleo.

J. RECURSOS

42. Para financiar las medidas arriba mencionadas, y en consideración del carácter prioritario de la modernización del agro y del desarrollo rural, el Gobierno se compromete a incrementar los recursos del Estado destinados a ello, mediante, en particular:

Impuesto territorial

(a) Promover para el año 1997 la legislación y los mecanismos para la aplicación, en consulta con las municipalidades, de un impuesto territorial en las áreas rurales de fácil recaudación por dichas municipalidades. El impuesto, del cual serán exentas las propiedades de pequeña superficie, contribuirá a desestimular la tenencia de tierras ociosas y la subutilización de la tierra. Estos mecanismos en su conjunto no deberán incentivar la deforestación de tierras de vocación forestal.

Impuesto sobre tierras ociosas

(b) Establecer una nueva escala impositiva para el impuesto anual sobre tierras ociosas, que fije impuestos significativamente más altos a las tierras ociosas y/o subutilizadas de propiedad particular.

IV. MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y POLITICA FISCAL

A. MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

43. La administración pública debe convertirse en un instrumento eficiente al servicio de las políticas de desarrollo. Para ello, el Gobierno se compromete a:

Descentralización y desconcentración

44. Profundizar la descentralización y la desconcentración de las facultades, responsabilidades y recursos concentrados en el gobierno central con el objeto de modernizar y hacer efectiva y ágil la administración pública. La descentralización debe asegurar la transferencia del poder de decisión y recursos adecuados a los niveles apropiados (local, municipal, departamental y regional) para atender en forma eficiente las demandas del desarrollo socioeconómico y fomentar una estrecha interacción entre los órganos estatales y la población. Ello implica:

(a) Promover una reforma de la Ley del Organismo Ejecutivo y de la Ley de Gobernación y Administración de los Departamentos de la República y, en particular, del Decreto 586 de 1956, a fin de permitir la simplificación, descentralización y desconcentración de la administración pública.

(b) Promover la descentralización de los sistemas de apoyo, incluyendo el sistema de compras y contrataciones, el sistema de recursos humanos, el sistema de información y estadísticas y el sistema de administración financiera.

Fiscalización nacional

45. Reformar, fortalecer y modernizar la Contraloría General de Cuentas.

Profesionalización y dignificación de los servidores públicos

46. El Estado debe contar con un personal calificado que permita el manejo honesto y eficiente de los recursos públicos. Para ello, es necesario:

(a) Establecer la carrera de servicio civil.

(b) Tomar las medidas legales y administrativas para asegurar el efectivo cumplimiento de la Ley de Probidad y Responsabilidades.

(c) Promover la sanción penal por actos de corrupción y mal manejo de recursos públicos.

B. POLITICA FISCAL

47. La política fiscal (ingresos y egresos) es la herramienta clave para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales, y en particular aquellas relacionadas con el desarrollo social, que es esencial en la búsqueda del bien común. Asimismo, la política fiscal es fundamental para el desarrollo sostenible de Guatemala, afectado por los bajos índices de educación, salud, seguridad ciudadana, carencia de infraestructura y otros aspectos que no permiten incrementar la productividad del trabajo y la competitividad de la economía guatemalteca.

Política presupuestaria

48. La política presupuestaria debe responder a la necesidad de un desarrollo socioeconómico con estabilidad, para lo cual se requiere de una política de gasto público enmarcada en los siguientes principios básicos:

(a) Prioridad hacia el gasto social, el financiamiento de la prestación de servicios públicos y la infraestructura básica de apoyo a la producción y comercialización.

(b) Prioridad a la inversión social en salud, educación y vivienda, el desarrollo rural, a la promoción de empleo y al cumplimiento de los compromisos asumidos en los acuerdos de paz. El presupuesto debe contemplar suficientes recursos para el fortalecimiento de los organismos y de las instituciones que garantizan el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.

(c) Ejecución eficiente del presupuesto, con énfasis en su descentralización, desconcentración y fiscalización.

Política tributaria

49. La política tributaria debe concebirse en forma que permita la recaudación de los recursos necesarios para el cumplimiento de las tareas del Estado, incluyendo los fondos requeridos para la consolidación de la paz, dentro de un sistema tributario que se enmarque en los siguientes principios básicos:

(a) Ser un sistema justo, equitativo y globalmente progresivo, conforme al principio constitucional de la capacidad de pago.

(b) Ser universal y obligatorio.

(c) Estimular el ahorro y la inversión.

50. Asimismo, el Estado debe asegurar eficacia y transparencia en la recaudación tributaria y la administración fiscal, a fin de fomentar la confianza de los contribuyentes en la gestión estatal y eliminar la evasión y defraudación fiscal.

Meta de recaudación tributaria

51. Teniendo en cuenta la necesidad de incrementar los ingresos del Estado para hacer frente a las tareas urgentes del crecimiento económico, del desarrollo social y de la construcción de la paz, el Gobierno se compromete a que, antes del año 2000, la carga tributaria en relación al PIB se haya incrementado en, por lo menos, un 50% con respecto a la carga tributaria de 1995.

Compromiso fiscal

52. Para avanzar hacia un sistema tributario justo y equitativo, el Gobierno se compromete a atacar el factor más grave de injusticia e inequidad en materia tributaria, a saber, la evasión y defraudación fiscal, especialmente en el caso de quienes debieran ser los mayores contribuyentes. Con miras a erradicar los privilegios y abusos, eliminar la evasión y la defraudación fiscal, así como aplicar un sistema tributario globalmente progresivo, el Gobierno se compromete a:

Legislación

(a) Promover una reforma al Código Tributario que establezca mayores sanciones a la evasión, la elusión y la defraudación tributarias, tanto para los contribuyentes como para los funcionarios encargados de la administración fiscal.

(b) Promover una reforma de la legislación tributaria con miras a eliminar las disposiciones que faciliten la evasión fiscal.

(c) Evaluar y regular estrictamente las exenciones tributarias con miras a eliminar los abusos.

Fortalecimiento de la administración tributaria

(d) Fortalecer los mecanismos existentes de fiscalización y recaudación tales como control cruzado, número de identificación tributaria (NIT) y crédito fiscal por retención del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado.

(e) Simplificar y automatizar las operaciones de la administración fiscal.

(f) Garantizar la correcta y rápida aplicación o devolución del crédito fiscal y sancionar severamente a quienes no reitengran al fisco el IVA retenido.

(g) Crear un programa especial dirigido a los grandes contribuyentes con el objeto de garantizar que cumplan debidamente sus obligaciones tributarias.

(h) Poner en funcionamiento estructuras administrativas que específicamente atiendan los programas de recaudación y fiscalización del presupuesto de ingresos y la aplicación de las leyes tributarias correspondientes.

(i) Fortalecer la capacidad de los municipios de cumplir con sus atribuciones en la recaudación de recursos.

Participación

(j) Propiciar que el sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural contribuya a la definición y seguimiento de la política fiscal, en el marco de su mandato de formulación de las políticas de desarrollo.

Educación cívica

(k) Dentro de los programas de educación, continuar promoviendo el conocimiento, respeto y cumplimiento de las obligaciones tributarias como parte de la convivencia democrática.

Cumplimiento de la política fiscal

53. El incumplimiento de las obligaciones tributarias priva al país de los recursos necesarios para atender los rezagos sociales que afectan a la

sociedad guatemalteca. El Gobierno se compromete a aplicar sanciones ejemplares a quienes, de distintas maneras, defrauden al fisco; asimismo, a llevar a cabo la modernización y fortalecimiento de la administración fiscal, así como la priorización del gasto hacia la inversión social.

V. DISPOSICIONES FINALES

Primera.- El presente Acuerdo forma parte del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y entrará en vigencia en el momento de la firma de este último.

Segunda.- En atención a que el presente Acuerdo responde al interés de los guatemaltecos, el Gobierno iniciará de inmediato las acciones de programación y planificación que le permitan cumplir con los compromisos de inversión contenidos en el mismo.

Tercera.- De conformidad con el Acuerdo Marco, se solicita al Secretario General de las Naciones Unidas que verifique el cumplimiento del presente acuerdo.

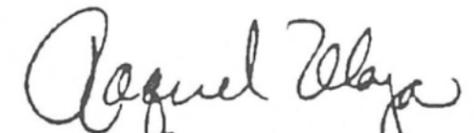
Cuarta.- Se dará la más amplia divulgación al presente acuerdo, para lo cual se solicita la cooperación de los medios de comunicación y los centros de enseñanza y de educación.

México, D.F., a 6 de mayo de 1996.

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA



Gustavo PORRAS CASTEJON



Raquel ZELAYA ROSALES

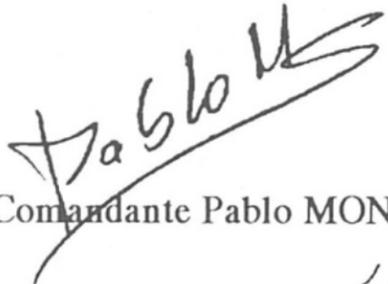


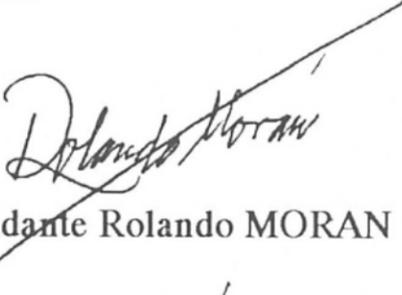
Otto PEREZ MOLINA
General de Brigada

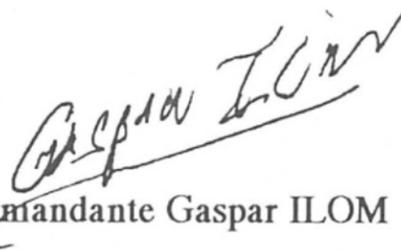


Richard AITKENHEAD CASTILLO

POR LA UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA
Comandancia General


 Comandante Pablo MONSANTO


 Comandante Rolando MORAN


 Comandante Gaspar ILOM


 Carlos GONZALEZ

POR LAS NACIONES UNIDAS


 Marrack GOULDING
 Secretario General Adjunto


 Jean ARNAULT
 Moderador

DECLARACION SOBRE EL AVANCE DE LAS NEGOCIACIONES
DEL PROCESO DE PAZ EN GUATEMALA

Los Presidentes de Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá, el Vice Presidente de El Salvador y el representante del Primer Ministro de Belice:

Considerando la continua e impostergable necesidad de fortalecer los procesos de paz y negociación en Centroamérica y por consiguiente de garantizar la estabilidad, la seguridad y la justicia social, bases de la consolidación del orden político democrático y del desarrollo integral de nuestros pueblos;

Reconociendo la enorme importancia que tiene para Centroamérica la pronta finalización del enfrentamiento armado interno en Guatemala;

Conscientes que Centroamérica ofrece las condiciones necesarias para establecer una relación de interdependencia entre un programa para la paz y una agenda para el desarrollo, propiciando a la región como un modelo de solución de conflictos que consoliden la paz y democracia por medio de un desarrollo sostenible basado en amplios consensos políticos y participación ciudadana, ya demostrados;

Reafirmando el compromiso conjunto de erradicar el uso de la violencia por cuanto atenta contra los principios del sistema democrático, la convivencia pacífica, la plena vigencia de los derechos humanos y la consolidación de la paz y la democracia en Centroamérica;

ACUERDAN

1. Apoyar los esfuerzos concretos en la búsqueda de alcanzar la paz, impulsados por el Gobierno de Guatemala para lograr la pronta finalización del enfrentamiento armado interno y con ello garantizar la paz, la seguridad y la justicia social en ese país y, por consiguiente, en la región.
2. Felicitar al pueblo y Gobierno de Guatemala por la suscripción el seis de mayo en curso, en la Ciudad de México, del acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, elemento decisivo en la negociación, que junto con la suspensión de acciones ofensivas y finalización de la imposición del impuesto de guerra, representan avances trascendentales e irreversibles hacia la firma final de los Acuerdos de Paz.

3. Reconocer los esfuerzos constructivos de las partes en la negociación por identificar y expresar el interés de todos los guatemaltecos, así como el involucramiento activo de todos los ciudadanos, en la búsqueda e implementación de las soluciones contenidas en los compromisos asumidos.

Suscribimos la presente Declaración en Montelimar, República de Nicaragua, a los ocho días del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis.

JOSE MARIA FIGUERES OLSEN
PRESIDENTE
REPUBLICA DE COSTA RICA

CARLOS ROBERTO REINA
PRESIDENTE
REPUBLICA DE HONDURAS

VIOLETA BARRIOS DE CHAMORRO
PRESIDENTE
REPUBLICA DE NICARAGUA

ERNESTO PEREZ BALLADARES
PRESIDENTE
REPUBLICA DE PANAMA

ENRIQUE BONGO BUSTAMANTE
VICEPRESIDENTE
REPUBLICA DE EL SALVADOR

HENRY YOUNG
MINISTRO DE TURISMO Y
MEDIOAMBIENTE EN
REPRESENTACION DEL
GOBIERNO DE BELICE

PROF. DR. ROMAN HERZOG
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
TESTIGO DE HONOR



Asociación de Investigación y
Estudios Sociales (ASIES)
Guatemala

Surgida en 1979 y fundada en 1982, es una entidad de carácter privado, de servicio, cultural y no lucrativa, formada por personas interesadas en la reflexión, análisis e investigación científica de la realidad nacional, con el objeto de estimular el interés general para la búsqueda y realización de soluciones concretas a la problemática atingente al país, inspirada en el principio de la participación ciudadana.

ASIES es una entidad con personalidad jurídica reconocida en Acuerdo Gubernativo número 608-88, del 2 de agosto de 1988.

FINES:

- Llevar a cabo investigaciones y análisis de la realidad política, económico social y cultural del país.
- Promover el estudio, discusión y reflexión sobre los problemas nacionales y los que afectan al país en el plano internacional.
- Enriquecer las relaciones recíprocas personales y el caudal de conocimientos científicos de los asociados.

FUNCIONES:

- De foro nacional de reflexión y discusión de los fenómenos socio-políticos que conforman la problemática guatemalteca, organizando toda clase de eventos culturales, públicos y privados.
- De relación, servicio y cooperación con entidades públicas y privadas de carácter cultural y científico.
- De información y formación mediante la difusión de los resultados de las investigaciones y sus análisis.

The Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) (Association for Social Research and Study) born in 1979 and organized as an entity in 1982, is a private service and cultural non-profit organization, established by persons interested in the analysis and scientific research of national realities, for the purpose of stimulating general interest in the research and implementation of concrete solutions to the problems which affect the country, inspired on the principle of participation of citizens.

ASIES attained its juridical personality under Government Resolution No. 608-88 on August 2, 1988.

OBJETIVES

- To carry research and analysis of the political, economic, social and cultural reality of the country.
- To promote the study and discussion of national problems and those which affect the country an international level.
- To improve mutual personal relations and the scientific knowledge of its associates.

FUNCTIONS

- Act as the national forum for consideration and discussion of the socio political causes of the problems of Guatemala, by organizing all kinds of public and private cultural events.
- Relationship, service and cooperation with public and private entities of a cultural and scientific nature.
- Information and training by means of the publications of the results of its research and analysis.